

Crónica del mes

Marzo-abril

Las primeras justas electorales del siglo XXI fueron, sin lugar a dudas, el hecho de mayor trascendencia en El Salvador, durante el mes de marzo. El domingo 16, unos 3.5 millones de salvadoreños fueron llamados a emitir el sufragio para elegir a los 262 concejos municipales y a los 84 diputados que fungirán en los próximos tres años. Nueve mil 27 urnas estaban dispuestas en 362 centros de votación, con una oferta de 11 partidos en contienda —seis de los cuales, de acuerdo a los resultados definitivos, desaparecerían del espectro político, debido al escaso caudal de votos obtenidos—.

Durante las semanas previas al evento, partidos políticos y candidatos saturaron con su propaganda los espacios televisivos, radiales y de la prensa escrita, a fin de seducir, a toda costa, al electorado; además, las baterías propagandísticas se cargaron para recubrir con los rostros de ilustres personalidades y banderas variopintas el paisaje urbano de las principales ciudades del país, violentando, en no pocas ocasiones, el Código Electoral. Los capítulos de violencia electoral no se hicieron esperar, a medida que la campaña proselitista entraba en calor.

Al otro lado de la lente, gran parte del electorado se mostraba casi inmóvil ante el cortejo propagandístico, y lo demostró el día de las elecciones: el abstencionismo rondó, según las versiones preliminares, el 58 por ciento, un porcentaje ligeramente inferior al último evento electoral. En suma, pues, toda la sociedad fue sometida a un ritual de seducción, en el que los señores de la política, candidatos y partidos, desplegaron toda su maquinaria propagandística para convencer a los salvadoreños con sus ofertas políticas y agenciarse la mayor cantidad posible de sillas edilicias y escaños legislativos. Como era de suponer, todas las dinámicas

sociales giraron en torno al evento electoral, condicionando grandemente la actual coyuntura. Los resultados de los comicios abrieron el camino de las revisiones y recomposiciones en el seno de los principales partidos políticos, durante las semanas siguientes. En abril, por ejemplo, las consultas y las pugnas entre los dirigentes al interior de ARENA terminaron en la renuncia del COENA de los empresarios y el asenso de otros areneros al máximo organismo de dirección partidario.

A principios de marzo, mientras los candidatos y sus partidos se mantenían en contienda, el Ejecutivo salvadoreño negociaba el TLC con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). En este punto, durante ese mes se dieron los preparativos para la tercera ronda de negociaciones, a realizarse a principios de abril en San Salvador. Los sectores económicos más pudientes (empresa privada, sistema financiero, telecomunicaciones, exportadores, textiles y algunas esferas del agro) unieron sus voces para incluir sus intereses en las negociaciones, mientras otros sectores tradicionalmente excluidos ni siquiera tuvieron la capacidad de convocatoria suficiente como para hacer oír sus demandas.

En el plano social, con la vigencia de la huelga de los médicos, se mantenía latente la crisis en el Seguro Social, a pesar de la campaña mediática montada por la dirección de esa institución autónoma, con el objetivo de mostrar una discutible situación de normalidad. Al mismo tiempo, la saturación de propaganda política en los principales medios informativos se tradujo en una escasa cobertura de la crisis de la salud, que desde septiembre de 2002 mantiene en vilo a los cientos de usuarios de la red de hospitales del Seguro Social y de los hospitales públicos. El tema del Seguro Social no fue retomado sino hasta abril, cuando

había pasado la etapa de asimilación de los resultados electorales. Sin embargo, el escaso interés mediático respecto del movimiento huelguístico durante marzo contrastó con la algarabía suscitada por la reunión de los propietarios de los principales medios de comunicación en el país, realizada a finales de ese mes en la ciudad capital. Las reuniones simultáneas de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sí gozaron de una amplia cobertura en la agenda mediática. Y no era para menos: los dueños de los medios más poderosos de El Salvador tuvieron el espacio propicio para manifestar sus quejas en contra de quienes, según ellos, han pisoteado la libertad de prensa en el país. Las alusiones en contra de partidos políticos no podían faltar a la cita de los empresarios de la comunicación.

Volviendo al marco de los preparativos de las elecciones, la actividad proselitista crecía a medida que se acercaba el cierre de campaña. Las visitas de los candidatos a lugares públicos, las encuestas de opinión, las frases grandilocuentes y victoriosas, y las rencillas entre simpatizantes de distintos institutos políticos se volvió parte de la vida cotidiana de los salvadoreños. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanzaba con lentitud en el cumplimiento de sus obligaciones y más bien se mostraba inoperante en ciertos casos. En esa línea, desde el 4 de marzo, la opinión pública tuvo acceso a algunos resultados de una auditoría interna en el tribunal de elecciones que mostraba lo obvio: el orden administrativo no era uno de los fuertes del TSE, a escasos días de las elecciones. Con todo y las debilidades del sistema electoral, el TSE dio por cerrado el período de propaganda política, el 12 de marzo, 72 horas antes de los comicios. A dos días de las justas, los magistrados del tribunal se comprometieron a brindar, horas después del cierre de las urnas, los resultados de las elecciones y a impartir justicia electoral de manera efectiva, para garantizar la transparencia de los comicios. No obstante, frases de realismo surgidas incluso desde el interior del mismo tribunal ilustraban las debilidades del TSE en su rol de gendarme electoral: "Hay un criterio de equilibrio político, lo cual desvirtúa el hecho de hacer justicia sobre las resoluciones que se tienen que dar", manifestaba el 14 de marzo, uno de los magistrados del TSE, Roberto Viera.

La jornada del 16 de marzo comenzó con cierta normalidad en todo el territorio nacional; a *grosso*

modo, las irregularidades, más que la norma, fueron la excepción. Solo se registraron algunas anomalías en distintos sitios de votación; las más comunes: atrasos en la apertura, llegadas tarde, desorden logístico e inconvenientes menores para los electores, sin faltar algún delito electoral. Las autoridades, por su parte, no registraron mayores incidentes. Entrada la noche, el FMLN celebraba el triunfo en las alcaldías de San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla y Soyapango. "Temo a la falta de madurez política en el país. Tengo por delante un año de campaña, y nuestros adversarios tienen el poder para causar daño a mi proyecto", comentaba cauteloso el alcalde capitalino electo, Carlos Rivas Zamora, del FMLN. Su principal contrincante, la ex ministra de Educación, Evelyn Jacir de Lovo, aceptaba haber perdido las elecciones en San Salvador y prometía ejercer una "oposición constructiva" en la alcaldía capitalina. Luego de conocerse los resultados, la ex ministra se alejó de la opinión pública. ARENA, por su parte, sin reconocer en ningún momento la derrota, aseguraba haber aumentado su caudal de votos en todo el país. Con una mezcla de sabor agridulce, los miembros del COENA, máximo organismo de dirección del partido de derecha, aparecieron ante las cámaras celebrando un gane inexistente. A las 11:00 p.m., el TSE aseguraba haber procesado solo el 20 por ciento del total de actas, augurando un retraso que se prolongaría una semana más.

Hasta el 17 por la tarde, el TSE no había podido dar un escrutinio preliminar de los votos, aunque ya se dejaban ver algunos resultados concretos, por ejemplo, el predominio de las bancadas legislativas de ARENA y el PCN (al acumular entre ambos por lo menos 43 diputados, es decir, los requeridos para aprobar leyes por mayoría simple) y una fracción mayoritaria del FMLN (con por lo menos 31 curules); además, se anunciaba la muerte de seis institutos políticos (PPR, PMR, AP, FC, PAN y PSD) que no alcanzaron el 3% de los votos válidos emitidos. A pesar del retraso (el TSE aún no tenía en su poder 406 actas), los magistrados aseguraban que ello no afectaría en absoluto la transparencia del proceso electoral. Ese mismo día, los observadores internacionales recomendaban a El Salvador reformar su sistema electoral, a fin de introducir la modalidad de voto residencial y despartidarizar el Tribunal Supremo Electoral.

El 22, tras una semana de retraso, el TSE dio a conocer los resultados definitivos de las justas

electorales, aunque quedaba en evidencia que el escrutinio seguía abierto en algunos casos concretos. De acuerdo a los resultados del Área Metropolitana de San Salvador, el FMLN conservaba las alcaldías ganadas en 2000 y arrebatada a ARENA la municipalidad de Panchimalco, mientras este último partido conservaba las sillas edilicias de Antiguo Cuscatlán, Cuscatancingo y San Martín. ARENA pasó a gobernar 111 municipalidades, 16 menos que las gobernadas en la actualidad; el FMLN se apoderó de 62 alcaldías, 17 menos que en 2000; el PCN, 53, es decir, 20 más que las ganadas en las pasadas elecciones; el PDC, 14 y el CDU, 4. En el ámbito legislativo, el PCN se convirtió nuevamente en una fracción clave para las aspiraciones de las principales fuerzas legislativas: ARENA necesitará de sus votos para aprobar leyes y préstamos internacionales que solo requerían mayoría simple; el FMLN, por su parte, tendría que acudir a la bancada pecenista para superar cualquier veto presidencial.

La victoria del FMLN en la alcaldía capitalina —y, por extensión, en las restantes comunas del Gran San Salvador—, merece especial atención, por su simbolismo político. A juzgar por los magnos recursos destinados por ARENA para hacerse del gobierno del municipio y por la insistente campaña mediática que perseguía desprestigiar la actual administración de la comuna, la silla edilicia de la capital ha sido uno de los baluartes más preciados de la contienda electoral. No es casualidad que el proyecto de tratamiento de los desechos sólidos liderado por los alcaldes efemelenistas de San Salvador haya sido el blanco de las mal intencionadas campañas de desprestigio —camufladas bajo el ropaje de investigación periodística— de la prensa de derecha. Durante las últimas semanas de febrero, uno de los matutinos nacionales había iniciado una serie de publicaciones en las que señalaba serias irregularidades en la empresa canadiense CINTEC, socia de los alcaldes farabundistas, aglutinados en la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES). En esa línea, en su edición del 1° de marzo, *La Prensa Gráfica* publicaba las declaraciones del embajador canadiense para Guatemala y El Salvador, James Lambert, en las que daba el total respaldo de su gobierno a las operaciones de la empresa CINTEC. Lambert calificó de “irresponsables” las acusaciones vertidas por el rotativo *El Diario de Hoy* en contra de la empresa canadiense y de los alcaldes del FMLN. La Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República

habían iniciado investigaciones, a raíz de la versión del citado periódico. Sin embargo, hasta el 5 de marzo, ni la Fiscalía ni la Corte de Cuentas habían podido fundamentar irregularidades en la administración del proyecto. Y no pudieron hacerlo en los restantes días. Tampoco *El Diario de Hoy* continuó con su malintencionada investigación.

El fracaso de ARENA y de su candidata estrella en San Salvador, el 16 de marzo, fue doblemente significativo. Por un lado, permitió concluir que el despliegue de la impresionante campaña de prestigio acuñada desde los círculos políticos y empresariales de derecha no fue suficiente como para minar el apoyo de la mayor parte de capitalinos a la administración edilicia liderada por Héctor Silva y la izquierda. En otras palabras —y lejos de la miope interpretación de algunos columnistas de derecha—, los ciudadanos de la capital no se tragaron el anzuelo de los estrategas de campaña de ARENA y sus comparsas. Por otro lado, la imposibilidad de recuperar una vez más la alcaldía de San Salvador marcó un nuevo punto de inflexión en el partido ARENA. Del fracaso de ese partido en San Salvador —sumado a los pobres resultados en el ámbito legislativo— no había más que unos pasos a la reestructuración partidaria. La lectura de primera hora de algunos areneros, en el sentido de que lo importante era competir y no ganar, contravino totalmente los supuestos más arraigados en la identidad de ARENA.

En el mismo sentido, tampoco guarda afinidad con el modo de ser arenero la algarabía y el optimismo con el que algunas figuras de ese partido —candidatos y candidatas que conocieron el sabor amargo de la derrota— interpretaron los resultados de las elecciones. No haber obtenido aquello por lo que se luchó con empeño —una mayoría en la Asamblea Legislativa y el control de alcaldías claves como la de San Salvador— es señal de fracaso para alguien que siempre logra lo que quiere. Los resultados de las elecciones municipales y legislativas dejaron frustrada a la derecha más dura del país y no solo a los jefes de ARENA. En términos reales, es poco lo que el partido ha perdido, pues la aritmética legislativa favorece al bloque de derecha y la alcaldía de San Salvador ya estaba en manos de la izquierda. En términos simbólicos, los jefes de ARENA y la gran prensa de derecha —y, más específicamente, el sector de ésta que más se radicalizó en la campaña electoral— no pueden dejar de leer los resultados como una de-

vas que disminuyan la discrecionalidad del Viceministerio de Transporte en la administración del transporte público. De hecho, los temas de salud, transporte y café, sensibles para ARENA, aglutinarían los esfuerzos de pecenistas y farabundistas en contra del partido oficial.

En lo que a la dinámica de la economía se refiere, gran parte de los esfuerzos gubernamentales fueron destinados, de nueva cuenta, a la negociación del TLC con Estados Unidos. El mes de marzo iniciaba, además, con el anuncio de un plan de ahorro público, mediante el cual el gobierno se trazaba la meta de ahorrarse unos 25 millones de dólares, en el presente año. Para tales efectos, el Ejecutivo había rubricado el decreto "Política de ahorro del sector público 2003", en el que se estipulaban medidas como el control de uso de teléfonos celulares, uso de vehículos estatales y suspensión de contrataciones en todas las dependencias públicas. Con todo, el tema del TLC dominó la agenda económica gubernamental a la largo del mes. En esta última cuestión resalta, por un lado, el cabildeo nacional e internacional —con campaña publicitaria incluida— montado por los negociadores y el gabinete económico, para convencer a los salvadoreños de las pretendidas bondades de un eventual tratado comercial con los estadounidenses y para conseguir, de estos últimos, un trato preferencial para los productos locales.

Por otro lado, llaman poderosamente la atención los procesos de consulta implementados por los sectores económicos pudientes en el país y el eco que generaron en las esferas gubernamentales, en contraste con la marginación de sectores como la pequeña y mediana empresa, el café y el agro, en general. En el marco de los preparativos de la tercera ronda de negociaciones del CAFTA, durante los primeros días del mes, los centroamericanos afinaban sus propuestas de armonización arancelaria de los productos que circulan por la región. Se discutían, además, temas como la unificación aduanera y la integración económica regional, a pesar de que surgirían nuevos roces comerciales entre Honduras y Nicaragua.

En el ámbito nacional, el 6 de marzo, un rotativo revelaba los resultados de un estudio técnico emanado del Ministerio de Agricultura, en el que se detallaba que el sector cárnico de la región centroamericana no lograría resistir la competencia una vez entrara en vigencia la desgravación arancelaria. Un día después, la empresa privada aglu-

tinada en ANEP entregó al ministro de Economía y líder del equipo negociador salvadoreño, Miguel Lacayo, el informe que recoge las consultas de ese sector en torno al TLC. En el documento se detallaban las fortalezas y debilidades de los empresarios consultados por la gremial empresarial; de acuerdo al estudio, el más sensible de ellos es, evidentemente, la agricultura. El 18, los presidentes centroamericanos, reunidos en Honduras, afirmaban retóricamente que darían prioridad al sector agrícola, para negociar con Estados Unidos.

Para cerrar el mes, el día 27, el ministro de Economía salvadoreño presentó una estrategia de participación de la sociedad civil en las negociaciones comerciales. De acuerdo al funcionario, se implementarían seminarios y charlas informativas, audiencias públicas, estrategias de comunicación masivas, consultas directas con la cartera de Economía y participación en las rondas de negociación en el denominado cuarto adjunto, es decir, una sala especial en la que ciudadanos acreditados podrían tener acceso a algunos tópicos de interés. Sin embargo, el ministro no detalló la fecha de entrada en vigor de dicha estrategia de participación ciudadana. De hecho, hasta abril, la prensa nacional no reseñó la implementación de espacio alguno de participación de la ciudadanía al respecto.

Paralelo a los cabildeos oficiales por el TLC y al desenlace del capítulo electoral, diversos sectores del agro salvadoreño discutían posibles vías que les sacaran de la actual crisis que golpea el sector. Dentro de éste, miembros del subsector cafetalero discutían la necesidad de implementar medidas inmediatas para paliar la crisis social y económica que padecen los habitantes de las haciendas y fincas cafetaleras. Pese a no hallar una respuesta inmediata en las esferas gubernamentales y financieras, los cafetaleros —especialmente, los pequeños productores— comenzaron a aglutinarse y a hacer oír sus demandas de manera organizada en el denominado Foro del Café, entidad que aglutina a productores independientes, cooperativistas y organismos no gubernamentales como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

A escasos días de las elecciones, los políticos no podían perder la oportunidad de sacar su cuota electoral de la crisis del agro. Así, el día 11, los candidatos a diputados de la oposición suscribieron un acuerdo con la Cámara Agropecuaria Salvadoreña (CAMAGRO), en el que se comprometían a impulsar unas 10 medidas de reactivación

del sector, en el corto plazo. Uno de los compromisos era, precisamente, acompañar al agro en la negociación del TLC con Estados Unidos. Los candidatos de ARENA no suscribieron el citado documento, argumentando que había otras maneras de comprometerse con el sector. Ese mismo día, se realizó en un hotel capitalino un nuevo encuentro del Foro del Café, en el cual se planteó la necesidad de impulsar medidas de asistencia a los pobladores de las fincas cafetaleras y de rescate de la caficultura. No obstante estos y otros esfuerzos, el impacto económico y social de la crisis del café en El Salvador no fue asumido como problema nacional. Y ello a pesar de las preocupantes carencias sociales —con muertos incluidos— que padecen, desde hace meses, los habitantes de las otrora pujantes fincas y haciendas cafetaleras.

Mediante la celebración del citado foro, se puso en evidencia que las frías estadísticas económicas manejadas desde hace un par de años se han traducido en un drama social: destrucción del empleo rural, reducción de los ingresos de las familias, inseguridad alimentaria en las zonas cafetaleras, migraciones hacia las zonas urbanas y Estados Unidos y, en menor grado, brotes de violencia surgidos de la desesperación y la pobreza. En la reunión de los cafetaleros fue posible sacar algunas conclusiones que merecen ser tomadas en cuenta. En primer lugar, el desplazamiento de las prioridades del gobierno de Flores, de la gran empresa privada y de las empresas mediáticas hacia otros asuntos de interés, al menos durante las semanas previas al evento electoral. Las empresas de la comunicación —y los medios informativos que financian— poco contribuyeron para que la catástrofe social del café fuera retomada como prioridad en la agenda de país.

Así, uno de los matutinos de mayor circulación titulaba en su edición del 12 de marzo: “Más alimentos para afectados por crisis del café”. En la nota periodística se hacía eco de la encomiable labor del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en cinco municipios del occidente del país, pero no se hacía mención alguna del Foro del Café —en cuyo encuentro se dio a conocer el proyecto del PMA— ni de las intenciones últimas del cónclave: concientizar al gobierno central, a la clase política y a la sociedad salvadoreña sobre la necesidad de atender, en el corto plazo, la crisis en la zona y, a mediano plazo, la crisis en el subsector cafetalero en general. Aún así, el mismo rotativo

reveló algunos datos tomados de una encuesta realizada por FUNDE a varios campesinos que habitan las zonas cafetaleras del occidente del país: “Un 71 por ciento de los campesinos dijo que su alimentación empeoró con respecto al año pasado... También dijeron que han dejado de consumir alimentos que antes comían, como carnes y lácteos... Una de cada dos familias dijo que a sus niños les han detectado algún nivel de desnutrición”.

De alguna manera, las prioridades económicas del gobierno han quedado suficientemente claras en los últimos meses. El Ministerio de Economía —que cada vez deviene en una Secretaría de Comercio—, el Ministerio de Agricultura —en franco e intencional distanciamiento de las necesidades del agro— y todo el gabinete económico de Francisco Flores asumieron la negociación del TLC como prioridad indeclinable. No causó extrañeza que el ministro de Agricultura, Salvador Urrutia, manifestara que una de las propuestas del Foro del Café (decretar una ley moratoria en beneficio del sector) sería analizada “en su oportunidad”.

Como segunda conclusión, aparece la subordinación de la crisis del café a los intereses electorales. Nuevamente, echar mano del encuentro citado permite ilustrar esta afirmación: en el marco del foro, algunos políticos presentes —candidatos a ocupar cargos públicos— no escatimaron palabras para prometer, a todo pulmón, retomar la crisis del sector, haciendo uso gratuito del encuentro para hacer proselitismo. Las rechiflas desaprobando a algún candidato y las muestras de apoyo a otro no se hicieron esperar. Con todo, pueden entresacarse algunas cuestiones positivas del encuentro. En primer término, la paulatina toma de conciencia del impacto social de la crisis; dicho en otras palabras, lo que primero ha salido al encuentro no han sido las estadísticas, ni los análisis económicos, sino la dura realidad social. Por ejemplo, de acuerdo a datos manejados por el Foro, en la última cosecha se habrían perdido unos 130 mil empleos, lo que vino a sumarse al impacto causado hace dos años por los terremotos y la sequía en las regiones cafetaleras del país. El Programa Mundial de Alimentos alertó sobre el riesgo alimentario de cientos de familias y sobre la escasez de instituciones de asistencia que operan en las zonas. Finalmente, destacó la existencia de un incipiente —pero aún insuficiente— movimiento social que se hiciera cargo de la crisis del café.

rrota abrumadora. La razón es simple: su apuesta no fue para que las cosas quedaran igual que antes, sino para alterar drásticamente el esquema de poder legislativo y municipal. Los esfuerzos propagandísticos —guerra sucia incluida— no se hicieron para que el FMLN obtuviera más o iguales diputados que ARENA, sino para reducir significativamente su cuota legislativa. Evelyn Jacir de Lovo no fue lanzada como candidata a la alcaldía capitalina para quedar en segundo lugar, así como tampoco los ataques sistemáticos contra Héctor Silva y su concejo municipal fueron hechos para que aquél resultara electo diputado, ni para que Carlos Rivas Zamora fuera elegido alcalde de San Salvador.

Las voces críticas al interior del partido de derecha, pues, reclamando por los pobres resultados electorales no se hicieron esperar. Desde el 17 de marzo, un día después de los comicios, soplaron los vientos de cambio en el seno arenero. Uno de los más críticos, el ex presidente de la República, Armando Calderón Sol, demandaba la renuncia del COENA y una revisión estructural del partido. “Los miembros del COENA son gente muy valiosa, de primer orden, pero necesitan más experiencia política, más análisis político. Se necesita un mejor mensaje, y debemos pasar por una revisión”, sostenía Calderón Sol, el 18 de marzo. Aún más, el ex presidente de la República declaraba, sin ambages, que los malos resultados tenían un doble origen: la mala política social del presidente Flores y la ineficiencia del COENA, saturado de empresarios. El organismo de dirección del partido oficial se encontraba compuesto —hasta el domingo de las elecciones— esencialmente de hombres de negocios, por lo que Calderón Sol reclamó la remoción inmediata de sus miembros y la corrección por parte del Ejecutivo de sus políticas impopulares. Ese mismo día, el presidente del COENA y notable hombre de negocios, Archie Baldocchi, ponía su renuncia a la dirección del partido, debido, según su versión, a cuestiones personales y no como respuesta a los magros resultados electorales.

Las críticas continuaron en los siguientes días. De acuerdo a la edición del 26 de marzo de un rotativo nacional, muchos de los dirigentes areneros coincidían en que el presidente Francisco Flores era uno de los responsables de los resultados. A juicio de aquéllos, las malas políticas presidenciales, la falta de consenso en la toma de decisiones del Ejecutivo y el distanciamiento entre el partido y la pobla-

ción fueron algunos de los detonantes de la debacle electoral arenera. “La actual ARENA está desnaturalizada”, expresaba uno de los fundadores de ese instituto político, Ricardo Valdivieso, sumándose a las voces que pedían la reestructuración. De acuerdo a la misma fuente, Calderón Sol, junto a otro ex presidente, Alfredo Cristiani, serían los encargados de liderar el proceso de consulta a las bases areneras, para revisar la estructura del partido.

Ese mismo día 26, el ex miembro del gabinete de Calderón Sol, Ricardo Quiñónez, enfilaba sus críticas hacia el actual gabinete de Flores. Los ministros de Economía, Agricultura y Hacienda fueron el blanco de los señalamientos del ex funcionario, ahora director de la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO). Quiñónez aseguró que el sector agropecuario “a todos los niveles se siente no entendido, no atendido y excluido de los programas de desarrollo del país”. Respecto del titular de Hacienda, Juan José Daboub, le increpó haber sido “un doctor ‘no’ para todo aquello que necesite de incentivos”. El 28, trascendió que el sector profesional del partido culpaba de igual modo al equipo de ministros de Flores; nuevamente Daboub lideraba la lista de los acusados. Pero el informe respaldaba al COENA y consideraba contraproducente una reestructuración del partido, a 11 meses de las elecciones presidenciales de 2004. El informe denunciaba, además, signos claros de discriminación hacia los empresarios dentro del partido: “Estamos ante un tipo de discriminación que no esperábamos en El Salvador. Sería lógica en una estructura de otra naturaleza, no en ARENA”, rezaba el documento de los profesionales areneros.

El día 30, el partido de derecha finalizó la primera etapa del proceso de consulta a las bases, para definir, según sus adalides, una nueva estrategia de cara a las próximas elecciones. Ese mismo día, el presidente Flores iniciaba una nueva estrategia publicitaria para atemperar el tono de las críticas a su gestión y a su partido. Mediante un mensaje televisado, dijo haber comprendido el mensaje de los ciudadanos el día de las elecciones. Para Flores, las votaciones fueron una especie de “diálogo entre los ciudadanos y el presidente”, en el que aquéllos demandaban un mandato más cercano y diligente con la economía familiar. Flores, pues, iniciaba una campaña más de demagogia y promesas, en respuesta a los resultados de su partido político, convirtiendo como moneda al uso la frase “economía familiar”.

En esta medida, la revisión general iniciada en ARENA ha representado una doble bofetada para Francisco Flores, además de que se le han endosado los resultados negativos obtenidos por su partido en las elecciones recién pasadas. Por un lado, se desacreditó su estrategia de entregar el partido a los empresarios. Y, por otro, sus propios correligionarios le forzaron a rumiar sobre la realidad que siempre había negado, a despecho de tener que reconocer verdades por todos sabidas: la asfixia social a la que sus decisiones económicas han condenado a la mayor parte de los salvadoreños. Demás está decir que los resultados electorales desmintieron la idea del país maravilloso que Flores se empeñó en vender fuera de El Salvador. En la única oportunidad de hacer uso de la libertad de expresión que han tenido las bases del partido, no perdieron oportunidad en manifestar su rebelión en contra del gobierno. Semejante ejercicio de libertad de expresión habían hecho los también legisladores de derecha, José Almendárez y Orlando Arévalo, del PCN, al término de las elecciones, reconociendo que la presidencia de la Asamblea Legislativa le correspondía al FMLN por ser mayoría. Días después, el máximo dirigente del PCN —a la sazón, presidente de la Asamblea—, Ciro Cruz Zepeda, llamó a la sumisión a los rebeldes diputados. “Todos tienen que apegarse a lo que la fracción decide; aunque haya cosas que no les gusten, tienen que someterse. Y si alguien no está de acuerdo, ya sabemos como dirimir este tipo de problemas”, se leía en un matutino nacional, citando al presidente del Primer Órgano del Estado.

Pero los vientos de cambio no solo soplaron al interior de ARENA. A la par de las recomposiciones de este último, ciertos sectores del FMLN manifestaron su deseo de concretar un relevo generacional en las estructuras efemelenistas. “El FMLN necesita frescura en sus liderazgos, hay cambios generacionales que no se deben frenar”, manifestaba Ileana Rogel, diputada de ese partido de izquierda, una semana después de las elecciones. Otro debate surgió en ese instituto político luego de una propuesta presentada por la dirigencia, en la línea de ejercer un control político sobre sus alcaldes y ocasionalmente sancionar a quienes resultaren malparados en las evaluaciones. Algunos jefes edilicios reaccionaron con cautela ante el anuncio de la cúpula efemelenista, aunque le dieron el visto bueno. Una de las más emblemáticas figuras de ese partido, el alcalde de Nejapa, René Canjura, se expresaba en estos términos: “Nosotros

hemos luchado por la autonomía en la gestión municipal y por eso hay que ver despacio la citada propuesta, hay que definir los mecanismos”. Por otra parte, el dirigente histórico efemelenista, Schafik Handal, manifestó sus intenciones de seguir en los espacios ganados al interior del partido: “Voy a estar en el partido hasta que me muera”, comentaba en una entrevista publicada por *La Prensa Gráfica*, el 21 de marzo. Finalmente, durante los últimos días del mes, dirigentes del FMLN anunciaron que ya planeaban las elecciones internas, para definir las candidaturas presidenciales, en vistas de los comicios del año próximo.

La dinámica de los partidos políticos encontró eco en las estrategias de las fracciones legislativas que fungirán a partir del 1º de mayo. Si de pactos se trata, las fracciones mayoritarias se movilizaron luego de los resultados electorales, para definir sus estrategias en la nueva legislatura. En esa línea, el día 24, el FMLN proponía a ARENA concretar un proceso de acercamiento entre ambos partidos, que permitiera llevar a buen término los puntos que los efemelenistas consideraban de vital importancia para el país. En un comunicado de prensa publicado el día 25, el partido de izquierda consigna: “El FMLN y su fracción legislativa propone al partido ARENA, como las dos fuerzas mayoritarias que somos, concretar un proceso de concertación y negociación que aborde los temas y soluciones que permitan sacar al país del estado actual de estancamiento económico y grave deterioro social”. Aquellos temas, a juicio del FMLN, son: reinstalo de los huelguistas del ISSS; desarrollo rural y reactivación del agro e industria; combate de la pobreza; generación inmediata de empleo; incremento al salario mínimo y pensiones; crisis fiscal; apoyo a micro, mediana y pequeña empresa; seguridad ciudadana; lucha contra la corrupción y el crimen organizado; reformas al funcionamiento de la Asamblea Legislativa; descentralización y desarrollo municipal, reforma del sistema electoral; bimonetarismo y la revisión de las privatizaciones. En ese mismo orden, el día 27, un rotativo nacional publicaba los términos de otro pacto de entendimiento, esta vez entre las fracciones legislativas del FMLN y del PCN. Pacto que se prolongaría al menos hasta la conformación de la nueva legislatura. Ambas bancadas manifestaban tener al menos tres temas de interés común: revertir tres decretos vetados por el presidente Flores a favor de los cafetaleros; impulsar un decreto que garantice la no privatización de la salud; y aprobar iniciati-

De no ser por los esfuerzos decididos del sector por hacerse escuchar en la sociedad, difícilmente habrían obtenido los escasos espacios mediáticos a que tuvieron acceso por unos días. En cualquier caso, semejante situación se reprodujo en otra de las cuestiones sociales que, a pesar de su vital importancia para el país, no ha logrado suscitar el interés de los medios informativos, esta vez en respuesta a intereses electorales implícitos. La crisis en el Seguro Social, cuya manifestación más palpable ha sido la huelga de los médicos, fue escasamente cubierta por el periodismo salvadoreño durante las semanas previas a las elecciones. En ese marco, el 13 de marzo, tuvo lugar la sexta "marcha blanca" en algunas arterias de San Salvador. Uno de los objetivos de la misma era hacer un llamado para no votar por los partidos ARENA y PCN, como medida de castigo por el apoyo de éstos a la privatización de los servicios de salud. "Esperamos que la gente entienda nuestro mensaje, para que el próximo domingo no voten por quienes quieren privatizar la salud", expresaba Guillermo Mata, presidente del Colegio Médico y miembro de la Comisión Tripartita de médicos. A la actividad acudieron diputados y candidatos del FMLN, en un abierto apoyo a las demandas de los médicos y en una clara estrategia electoral. Movimientos de protesta similares se registraron en las ciudades norteamericanas de Los Ángeles y San Francisco.

Durante los últimos días del mes, diversos sectores sociales todavía se debatían sobre la normalidad de la situación en el Seguro Social y en la red de hospitales nacionales. Por un lado, desde las esferas gubernamentales se aseguraba que había una total situación de normalidad en los distintos nosocomios administrados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pese a que los huelguistas se mantenían en pie de lucha. Estos últimos aseguraban, con pruebas en mano, que la situación no llegaba a la normalidad que la versión oficial sostenía. Como quiera que sea, la huelga continuó durante el mes de marzo y la discusión en torno a la crisis de la salud no fue retomada sino hasta que se acercaba la toma de posesión de los concejos municipales y legisladores electos el 16 de marzo.

Una situación contraria se dio con la cita de los propietarios y directores de las empresas mediáticas de América, reunidos en San Salvador entre el 21 y el 24 de marzo. En efecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación In-

ternacional de Radiodifusores (AIR) se reunieron, separadamente, para discutir la situación de la libertad de prensa en el continente. El evento contó con un amplio despliegue de información en los medios salvadoreños. Curiosamente, lo que predominó en las notas periodísticas fueron los señalamientos en contra del FMLN, por un lado, y, por otro, el compromiso del presidente Flores en la línea de apoyar por la vía legal el acceso de la información de carácter público a los periodistas. En el caso particular de El Salvador, el punto a discutir en los encuentros fue la restricción al acceso de informes de interés público ejercida por instituciones de gobierno. Además, los convocados discutieron las agresiones físicas a que han sido expuestos algunos periodistas en su labor. "Aquí hay absoluta libertad de expresión, apertura a los medios, a todas las corrientes de pensamiento, pero nos preocupa que hay poca apertura a documentos públicos", expresaba Elías Antonio Saca, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de AIR y presidente de ANEP. En contraste, el periodista William Meléndez, presidente de APES comentaba que en el país "hay una libertad de expresión a medias".

El 24, Francisco Flores se comprometió, ante los participantes del encuentro de la SIP, a impulsar la creación de una ley que regule el acceso de información de carácter público a los medios informativos. "A mí me gusta más hacer que decir", presumía Flores al ser interrogado por los asistentes a la cita. Al final de la jornada, el país fue mencionado como una de las naciones de América en que "el acoso judicial se hace sentir" en contra de la labor periodística. Ese día, el periódico *El Diario de Hoy* presentó una denuncia ante la SIP, por agresiones en contra de sus periodistas por parte de activistas del FMLN. También la empresa privada tuvo espacio preferencial en el encuentro de la SIP. "A nosotros los empresarios nos corresponde cumplir con nuestra responsabilidad social, que es promover una sociedad más humana y solidaria, además de generar empleo y fomentar más y mejores oportunidades", expresaba Ricardo Poma, reconocido empresario salvadoreño.

Un día después de concluido el citado foro, el periodista de *TV 12*, Mauricio Funes, denunciaba que el espacio de opinión "Sin censura", transmitido por esa televisora diariamente, sería cerrado debido a presiones externas (gubernamentales y empresariales) a ese medio. Sin embargo, el gerente

general de ese canal de televisión, Alejandro González, aseguró que la clausura de tal espacio respondía únicamente a que no llenaba los principios de pluralidad a que aspiraba *TV 12*. González descartó la existencia de presiones de ningún tipo que hubiesen incidido en la medida. La SIP no se pronunció al respecto, como lo hicieron diferentes sectores sociales y políticos. Más bien, el 26, la entidad internacional resolvió, en el caso de El Salvador, “repudiar las prácticas del FMLN y de otros partidos y grupos de instar a la violencia contra periodistas y medios; exigir a esos grupos cesar en su agresión verbal y ataque sistemático a la imagen de los medios, exigiéndoles asimismo el respeto catorgórico a la libertad de expresión como una libertad democrática fundamental”. Al menos esas declaraciones fueron las únicas reproducidas por la prensa nacional de un documento en el que también se criticaba la cerrazón de instituciones del Estado como la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia y algunas instituciones autónomas como ANDA y CEL.

Los salvadoreños, en suma, vivieron unos intensos días durante el mes de marzo. En el espectro político, las justas electorales fueron el hecho de mayor importancia desde semanas atrás. De alguna manera, los resultados de las mismas incidirán, directamente, en el rumbo que tome el país en el corto y mediano plazo. En ese sentido, es posible afirmar que las fuerzas políticas mayoritarias deben reestructurarse para acudir con legitimidad a las elecciones presidenciales del próximo año. ARENA, por su parte, sufre una crisis de honestidad a los ojos del electorado salvadoreño. Es difícil sostener que sus propósitos de enmienda no son puramente una estrategia de comunicación para distraer (y manipular) a los salvadoreños. La experiencia dicta que el partido oficial no suele honrar sus promesas. Sus dirigentes suelen aprovecharse del calor de los resultados electorales para hacer propósitos de enmienda ante la población, pero, pasado el susto, persisten en seguir con sus políticas impopulares, como lo muestra la historia reciente del partido.

Si el FMLN quiere acceder a la presidencia de la República, debe mostrar altas dosis de flexibilidad. En ese sentido, si no logra dirimir con solvencia el debate generacional surgido en su seno, se expone a repetir un nuevo capítulo de desangramiento como el que terminó con la separación de los Renovadores. En cualquier caso, el FMLN

debe ingeniárselas para hacerse sentir como la fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa. La nueva legislatura deberá discutir temas vitales como los Tratados de Libre Comercio y la relación del país con Estados Unidos. Esto conduce a otros asuntos como la dolarización y la postura del gobierno salvadoreño en la arena internacional.

Respecto de los TLC, el FMLN considera en su documento de consulta que “someten al país, al pueblo, a la nación y a nuestra soberanía a los intereses del capital internacional, al imponer la apertura completa del país al comercio de todo tipo de productos, al no poner a las inversiones extranjeras ningún requisito de desempeño ambiental, laboral, de transferencia tecnológica, de permanencia en el tiempo, ni de otro tipo, lo mismo que al no incluir claramente los subsidios al sector agropecuario para enfrentar a los productos agropecuarios subsidiados provenientes de otros países, y al someter la solución de controversias a organismos internacionales y privados”. En tal sentido, cabría esperar que la fracción legislativa del FMLN no ratifique el TLC con Estados Unidos e igual actitud cabría esperar ante el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se avecina en el mediano plazo.

En el plano social, la crisis de la salud y el impacto socioeconómico de la crisis del agro aparecieron tímidamente en la agenda nacional de prioridades. La cuestión de la crisis en las zonas cafetaleras debiera llamar a los sectores involucrados a tomar cartas en el asunto. Lo contrario ocurrió con asuntos como el TLC con Estados Unidos, el cónclave de los empresarios de la comunicación americanos y el ya reseñado capítulo electoral. Estos temas han acarreado el interés —muchas veces fabricado— de los medios informativos salvadoreños, desviando la atención de asuntos más urgentes. En materia económica, se impone, más que la negociación de tratados comerciales, una labor inmensa para recuperar los niveles de productividad del país; en esa línea, habría que tomarse en serio el mensaje de un ex economista del Banco Mundial invitado por FUSADES, para que disertara sobre la economía nacional. El invitado decía más o menos esto: “el estancamiento de la economía salvadoreña se debe a la caída en la productividad de todos los sectores y de la inversión nacional y extranjera”; siendo más radical, el economista resumió su diagnóstico de la economía nacional así: “tenemos un problema de institucionalidad”.

Pasadas las elecciones municipales y legislativas del domingo 16 de marzo, la sociedad salvadoreña presenció un mes de preparación para que los diputados y concejos municipales electos asumieran sus puestos el 1° de mayo, Día Internacional del Trabajo. A la par, la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia revivió las pugnas entre las diversas instituciones que conforman el sistema judicial salvadoreño, mismo que fue duramente criticado por el Departamento de Estado de EEUU, por tercer año consecutivo. Adicionalmente, un balance del desempeño institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante los pasados comicios permitió concluir la necesidad de impulsar las reformas electorales pertinentes, a fin de que los futuros eventos gocen de mayores niveles de transparencia y legitimidad. Un somero examen al TSE mostró lo obvio: mucho dinero invertido y pocos resultados satisfactorios.

Durante el mes de abril, además, los principales partidos políticos afinaban sus estrategias de cara a las elecciones presidenciales del año próximo y terminaban de digerir los resultados de los pasados comicios. El FMLN tendió a envalentonarse y ARENA a mostrar una discutible unidad entre los sectores que lo conforman. El FMLN, por ejemplo, lanzó el día 4 de abril una lista de nombres que incluían sus posibles candidaturas para las elecciones presidenciales del 2004. En la nómina aparecían Schafik Handal, dirigente histórico efemelenista; Victoria Marina de Avilés, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Óscar Ortíz, alcalde reelecto de Nueva San Salvador; Violeta Menjívar, diputada; Arturo Záblah; y el comunicador Mauricio Funes. A 12 meses antes de los comicios, un sondeo de opinión de la Universidad Francisco Gavidia, revelaba ese mismo día que el FMLN se hallaba 8 puntos arriba de ARENA en las preferencias electorales, si las elecciones se realizaran en esa jornada.

Por otro lado, a pesar de las reestructuraciones lideradas en el seno de ARENA por los ex presidentes Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, fue Francisco Flores quien terminó por imponerse en el pulso arenero, llamando a la cordura a sus críticos copartidarios. De hecho, lo que pasara en ARENA desde que se conocieron los adversos resultados de los pasados comicios estuvo estrechamente ligado al nuevo giro iniciado por el mandatario desde el mes de abril. El día 1, el ex presidente Calderón Sol reveló que una de sus recomen-

daciones para su partido era la inclusión de elecciones primarias como mecanismo de definición de los candidatos presidenciales. "Sí serán incluidas las primarias en el documento. Eso se ha conversado mucho, esta discusión no es nueva", acotó el presidente honorario de ese partido de derecha.

En respuesta a los magros resultados electorales y a la críticas en contra de su gestión, el 2, Francisco Flores anunció en cadena nacional un paquete de cuatro medidas orientadas a atender los problemas de la "economía familiar": bajar las tarifas de electricidad, revisión de las pensiones (favoreciendo a unos 138 mil salvadoreños), reestructuración de la deuda de los cafetaleros y generación del empleo. Ello dio pie a una discusión en diversos sectores sobre la posibilidad de aumentar el salario mínimo, que desde 1998 se mantiene intacto. En esa línea, la empresa privada aglutinada en ANEP manifestó que consideraría el aumento en algunos sectores. Los empresarios anunciaban, además, que solo se oponían a revisar los salarios en los rubros de maquila y agropecuario. Los legisladores de oposición, por su parte, acordaron estudiar detenidamente las propuestas de Flores e incluir algunos temas sensibles como transporte, salud y salario mínimo. "El presidente hizo propuestas que al analizarlas no son nada", opinaba el efemelenista Schafik Handal. Hasta el 4, el futuro de la propuesta presidencial se veía incierto debido a la oposición de más del 50% de los diputados en la comisión legislativa de Economía.

Ese mismo día 4, los integrantes del COENA ponían sus cargos a disposición. Un día después, uno de los fundadores del partido, Ricardo Valdivieso, manifestó que ARENA "estaba secuestrado por gente falsa que se aprovechó de los areneros". Para rematar la etapa de críticas y el momentáneo silencio de Flores, en el documento de consulta elaborado por los ex presidentes areneros se recomendaba la apertura del partido a otros sectores políticos y sociales. Calderón Sol señaló, públicamente, que Flores había favorecido en demasía la macroeconomía, pero descuidando la implementación de políticas sociales.

El 12, ARENA estructuraba su máximo organismo de dirección, el COENA, designando como presidente al cafetalero José Antonio Salaverría, de talante moderado. A la cúpula subieron, entre otros, Mario Acosta Oertel, Gustavo López, Roberto Murray Meza y Eduardo Zablah. Los principales compromisos del nuevo COENA fueron de-

finidos así: reestructurar los liderazgos del país en 60 días y definir, en otros 30, la fórmula presidencial. “Hay un consenso en que nombramientos de dedo jamás los tendrá ARENA en el futuro. Creo que en no más de 30 días vamos a anunciar cuál va a ser el procedimiento”, prometía el nuevo presidente del COENA. El 13, el organismo de dirección fue ratificado en el marco de la asamblea general extraordinaria, en la cual se escucharon todo tipo de mensajes de unidad. Ese día, el presidente Flores, en un fogoso discurso, rompió el silencio que mantenía ante sus críticos: tildó de “desleales” a quienes le criticaron, en clara alusión a los ex mandatarios y otros areneros que se atrevieron a desentonar con la lógica del celoso mandatario. “Me encontré con acusaciones contra los gobiernos de ARENA, pero yo no iba a ser vocero del Frente [FMLN]. ¡Yo sí soy leal!”, fustigó Flores.

La discusión de ARENA consigo mismo y con la sociedad se dio en el marco de un inusitado entendimiento entre el PCN y el FMLN, en el ámbito legislativo, para quedarse con la directiva de la Asamblea en el período 2003-2006 y el reparto de las principales comisiones de trabajo. El CDU y el PDC, los dos partidos pequeños, solo contemplaban cómo el pacto “azulgrana” —como llegó a tildarlo la prensa nacional— hacía de las suyas en el seno legislativo. En este contexto, el último día de marzo, el viceministro de Transporte, Ricardo Yúdice, presentaba su renuncia a Flores, en vista de la oposición que dijo se dejaba sentir desde las fracciones legislativas del FMLN y el PCN. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea, presidida por el PCN, había demandado ese mismo día la destitución del funcionario. El 1° de abril, dirigentes pecenistas y efemenelistas aseguraron que conversaban para llegar a un acuerdo entre ambas fracciones y así conceder a los primeros la presidencia de la Asamblea en la nueva legislatura y a los segundos la presidencia de algunas comisiones de trabajo importantes como Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía y Agricultura y Asuntos Municipales.

Desde el día 3, los diputados de la Asamblea tenían en sus manos las propuestas económicas de Flores —entre ellas, la reforma a la Ley General de Electricidad— para que fueran aprobadas antes de concluir la legislatura saliente. Sobre las medidas para los cafetaleros, el anuncio de Flores decía “conscientes de la importancia que la caficultura tiene en nuestra sociedad, hemos logrado que el

entendimiento entre productores, beneficiadores, bancos y el Estado, culmine en acuerdos concretos que le permitan a los caficultores contar con su crédito de avío para labores de finca por un monto de \$15.00 por quintal con garantía del Estado, a través del Programa de Garantía Agropecuaria, PROGRARA; y de \$15.00 por quintal para la recolección del grano al final de la presente cosecha”.

Siempre en el seno legislativo, el día 8, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anunció el fallo sobre la proporción de diputados en la Asamblea Legislativa. De acuerdo a la referida Sala, la actual repartición de diputados por departamentos y su relación con la población, contenida en el Artículo 13 del Código Electoral, riñe con la Constitución de la República. Pese a la resolución judicial, los diputados electos para la legislatura entrante podrán asumir sus respectivos cargos sin ningún impedimento. Simultáneamente, integrantes del Foro del Café acudieron a las instalaciones de la Asamblea para presentar una contrapropuesta económica que, según ellos, sí beneficiaría a los productores de café en crisis. La iniciativa del foro halló eco en las fracciones del FMLN, PCN, PDC y CDU que aseguraron sus votos para impulsarla desde el seno parlamentario.

El 9, las fracciones del FMLN, PCN y ARENA aprobaron una serie de reformas que permitieron, entre otras cosas, el reinstalo de los médicos y sindicalistas huelguistas del Seguro Social y las excensiones de pago de multas de tránsito a conductores particulares y del transporte público. En el primer caso, gracias al acuerdo parlamentario, los huelguistas serían reinstalados en los hospitales Lamatepec, Roma y Central, ya que los puestos que ocupaban habían sido tomados por otros 274 médicos que, sumándose al plan contingencial sí laboraron mientras tenía vigencia la huelga. En el segundo, se dictaminó que las 900 mil esquelas impuestas desde 1996 hasta marzo de 2003 no serían canceladas, gracias a que el PCN y ARENA unieron sus votos para anularlas. Finalmente, los legisladores concedieron cuatro meses de gracia a los empresarios de buses para que éstos pongan sus papeles en regla conforme al sistema de transporte impulsado por Flores, desde finales de 2001.

En el marco de las evaluaciones poselectorales, el día 21 de abril, el matutino *La Prensa Gráfica* publicó una nota periodística en la que reseñaba la inoperatividad del Tribunal Supremo Electoral durante el pasado proceso electoral. El mismo día de

las elecciones y durante la semana posterior, asegura el periódico, el TSE perdió el control del conteo de votos, dejándolo a la discrecionalidad de los partidos políticos, cuyos representantes en las Juntas Receptoras de Voto decidían quiénes entraban o no a las salas donde se desarrollaba el escrutinio. De acuerdo a la fuente periodística, el primer informe de resultados, dado a conocer el 16 de marzo por la noche, fue un total fiasco, porque ni hubo resultados ni se dieron a conocer ganadores; además, 902 actas nunca llegaron al centro de escrutinio del tribunal. La nota concluye con los señalamientos de los delegados de la Organización de Estados Americanos: el retraso de casi dos horas en la llegada de las actas electorales fue “el problema más grave ocurrido el día de las elecciones, y al parecer está fuera del control del TSE”. De esta manera, los más de tres millones de dólares asignados al tribunal para que realizara el proceso no se tradujeron en resultados satisfactorios.

Volviendo a la dinámica de los partidos, el nuevo presidente de ARENA, no sin desentonar con el discurso de Francisco Flores, echó a andar una estrategia de acercamiento con las demás fuerzas políticas salvadoreñas. El más notable de ellos fue el arribo del dirigente arenero al más simbólico cubil efemelenista. El día 23, Salaverría, sostuvo una reunión con el coordinador general del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, en la sede capitalina del partido de izquierda, para restablecer la comunicación entre las dos mayores fuerzas políticas de El Salvador. “Esta visita está encaminada al proyecto de concertación y para establecer vínculos de comunicación entre partidos”, explicó Salaverría, luego del conversatorio. Como para no desentonar con el presidente de su partido, Flores aseguró, el día 25, que siempre conversaba con políticos de oposición. Inmediatamente, algunos dirigentes de la oposición desmintieron al mandatario. “Flores está haciendo lo que ha hecho durante toda su gestión: mentir”. comentaba Hugo Martínez, del FMLN. Ese mismo día, Flores anunció que a mediados de mayo se conocería su propuesta en torno al salario mínimo.

Por otro lado, el 28, Mauricio Sandoval, hasta entonces director de la Policía Nacional Civil, anunció públicamente que dejaba su cargo para postularse a la candidatura presidencial por ARENA. “En pleno goce de mis derechos civiles y atendiendo diferentes solicitudes de personas, comunidades y sectores, he tomado la decisión de partici-

par en este esfuerzo”, expresó el ex director policial. Algunos dirigentes de la oposición criticaron a Sandoval, también ex director del cuestionado Organismo de Inteligencia del Estado, por considerarlo un violador de los derechos humanos. Para finalizar el mes en el terreno legislativo, la última sesión de la legislatura 2000-2003, realizada el día 29 de abril, terminó sin los acuerdos por los que cabildeaba la fracción arenera: ni la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del agrado de ARENA ni las reformas constitucionales que permitieran implementar el paquete económico de Flores. Al final de la legislatura saliente únicamente se selló el pacto FMLN-PCN y se acordó que el CDU y PDC no integrarían la junta directiva del Parlamento.

La discusión en el seno del sistema judicial merece una atención especial. El reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos puso nuevamente en tela de juicio su funcionalidad; por otra parte, los políticos salvadoreños se encargaron de señalar la dependencia de ese Órgano del Estado respecto del Legislativo, fundamentalmente, y la necesidad de reducir las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que oriente sus esfuerzos únicamente a sus funciones jurisdiccionales. Las acusaciones mutuas entre funcionarios de la CSJ, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) —que reclama mayores atribuciones y un presupuesto independiente— y de la Fiscalía General de la República (FGR), rebasaban la tolerancia hasta decantar en insultos. Los más duros críticos a la Corte Suprema fueron el fiscal general, Belisario Artiga, y el hasta entonces director de la Policía, Mauricio Sandoval. Este último se había pronunciado, el día 10, a favor de una depuración general en el sistema de justicia. Ese mismo día, el magistrado de la CSJ, Mario Solano, consideró que las críticas en contra del Órgano Judicial debían capitalizarse para que se hicieran las correcciones pertinentes. Solano desestimó las declaraciones del presidente Flores en las que este último sostenía que desde los acuerdos de paz, solo el sistema judicial no se había reformado.

Las críticas se daban en momentos en que se mantenía en vilo la ocupación de cinco plazas para magistrados de la CSJ, en espera de estudio en la Asamblea Legislativa. El día 24, mientras los diputados manejaban los nombres de Eduardo Tenorio, Victoria de Avilés y Alfredo Clará para presi-

dir la Corte, diversos sectores criticaron la dependencia del Órgano Judicial respecto de la Asamblea Legislativa. La procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, instó a la independencia de la carrera judicial y a cambiar "la raíz, la estructura y el manejo total de la justicia en el país". Por su parte, la presidenta de la fundación FESPAD, Silvia Guillén, criticó la premura con la que los legisladores pretendían elegir a los 5 magistrados de la Corte, antes de que terminara su período legislativo el 30 de abril. Como ya se reseñó líneas arriba, la elección de los magistrados fue heredada a la legislatura entrante en la que se vislumbra una apretada negociación entre las tres fuerzas mayoritarias que la componen. Así, la discusión en torno a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y la dependencia del sistema judicial respecto de otros poderes del Estado quedó aún pendiente para posteriores discusiones y resoluciones de los actores políticos involucrados. Lo cierto es que en este punto se requieren cuotas de voluntad política que no han demostrado tener los correspondientes sectores.

En la dinámica económica, nuevamente sobresalieron las negociaciones del CAFTA y, en el ámbito doméstico, la discusión en torno al salario mínimo y el paquete económico anunciado por el presidente Flores, cuya implementación pende en gran parte del dictamen de los diputados de la legislatura 2003-2006. Así, al inicio de la tercera ronda de negociaciones realizada en San Salvador durante los primeros días de abril, el equipo estadounidense pedía, entre otras cosas, un acceso total al mercado centroamericano de telecomunicaciones. La propuesta norteamericana incluye el uso de las redes públicas de los cinco países del área para los inversionistas estadounidenses, incluso las de Costa Rica, país que no ha privatizado su sector eléctrico. El impulso de las altas esferas vaticinaba una rápida negociación del tratado. El día 10 de abril, el presidente Bush, reunido con los mandatarios centroamericanos en Washington, dio su apoyo a las negociaciones del TLC entre ambas regiones. Ese mismo día, un grupo de senadores demócratas y republicanos expresaron a los presidentes del área su simpatía por las negociaciones comerciales. En este encuentro se hizo énfasis en el fortalecimiento democrático de la región y el refuerzo de las políticas laborales de los países del área.

Con todo, de la tercera ronda de negociaciones quedaron pocos insumos de información disponibles para la ciudadanía, a pesar de la publicitada campaña gubernamental de participación ciudadana en las negociaciones del acuerdo comercial. A finales de abril, los gobernantes centroamericanos se preparaban en Honduras para asistir a la cuarta ronda de negociaciones del CAFTA. Los celos de los productores agrícolas del Istmo acompañaban las reuniones previas a las negociaciones, que se llevarán a cabo del 12 al 16 de mayo en Guatemala. Tales reuniones aparecieron, no obstante, como una oportunidad para que las comisiones negociadoras revisaran lo acordado en la última ronda, cuyo punto más relevante fue, precisamente, la propuesta estadounidense para que Centroamérica abriera su mercado a las empresas de telefonía de EEUU. También se discutió sobre la posibilidad de que algunas entidades gubernativas estadounidenses y de ciertos estados del país pudieran comprar productos centroamericanos.

Lo más relevante de los preparativos fueron los resultados de la reunión de la Federación Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales (FECAGRO) con los ministros de Agricultura de la región. El encuentro buscó elaborar una postura conjunta ante las próximas negociaciones. Se planteó el problema que causa mayor preocupación a los productores agrícolas: la situación de desigualdad ante los productos estadounidenses. Al parecer, la citada reunión obedecía al hecho de que los productores agrícolas estimaron que en la ronda anterior estos temas se tocaron de forma superficial. Pero no solo ese rubro debe tomarse en cuenta. Las cooperativas, que producen, por ejemplo, el 93 por ciento de productos lácteos, así como el 44 por ciento del café y el 36 por ciento de la palma aceitera de Costa Rica (*La Nación*, 28.04.03) no han sido escuchadas en el marco de las negociaciones.

Según apunta el redactor del periódico costarricense *La Nación*, Marvin Barquero, los cooperativistas demandan mayor transparencia al gobierno sobre las negociaciones del TLC. La falta de transparencia es un problema constantemente repetido en los tratados de libre comercio en Centroamérica. Los cooperativistas aducen acertadamente que "el solo hecho de dar información no puede considerarse como transparencia total".

Hasta ese momento, de hecho, privó la información parcial, que no toca temas espinosos, como los costos socioeconómicos del TLC para la región.

Respecto del salario mínimo no hubo mayores avances en el mes en cuestión. Hasta el 22 de abril, el Consejo Superior del Trabajo se encontraba en proceso de consulta en los diversos sectores de la sociedad civil para decidir sobre una eventual alza. Finalmente, el día 24, ANEP reveló que la banca, comercio, servicios e industria se mostraron de acuerdo en nivelar el salario mínimo, aunque no se dieron cifras exactas sobre el monto del alza. Así, las discusiones y consultas no se tradujeron en resultados concretos, al menos durante el mes de abril. Las gremiales empresariales siguieron discutiendo, el presidente Flores aguardando más tiempo y los trabajadores se mantuvieron pendientes, por un tiempo indefinido, hasta que se diera el visto bueno para la necesaria nivelación salarial.

Finalmente, en lo que concierne al ámbito social, los rebotes de violencia en el período vacacional de Semana Santa, la armamentización de la sociedad y la crisis de la salud parecen ser los asuntos que acapararon la mayor atención en abril. En ese sentido, un informe presentado el día 7 de abril por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en torno al control de armas, parecía preludiar la alta incidencia de muertes causadas por armas de fuego en las vacaciones de Semana Santa. El PNUD había manifestado que el control de armas de fuego fuera dejado exclusivamente en manos de la Policía Nacional Civil, que en la actualidad se coordina con el Ministerio de Defensa.

Días después, lamentablemente, El Salvador encabezaba las estadísticas regionales sobre fallecidos en las vacaciones de Semana Santa. Con 136 muertes en su haber —78 de ellas a causa de la violencia social—, los salvadoreños aparecían como los centroamericanos más violentos en ese período. Solo Nicaragua, con 85 fallecidos por diferentes causas, se acercaba a las estadísticas salvadoreñas. De acuerdo a la prensa nacional, el resto de países disminuyó en su cuota: Guatemala, 76 decesos; Costa Rica, 45; Honduras, 30; y Panamá, solamente 3 fallecidos. La pregunta, entonces, parecía ineludible: ¿qué es lo que origina que en El Salvador se registren, año tras año, más muertes que en el resto de los países del Istmo? El director del Comité de Emergencia Nacional (COEN),

Mauricio Ferrer, ofreció una respuesta al hacer el balance de los hechos: tal repunte se debe a que el sistema de emergencias salvadoreño es “más activo y organizado”. No obstante lo anterior, las causas parecen ir más allá. La armamentización de la sociedad —que según el PNUD ronda por unas 450 mil armas en manos de civiles—, la enconada cultura de la violencia, la tensión social derivada de situaciones adversas, la pérdida de valores y la escasa cultura de prevención parecen dar cuenta de los alarmantes datos salvadoreños.

El primer punto es, pues, el alto número de armas de fuego disponibles en la sociedad salvadoreña. De acuerdo a los datos del COEN, las personas fallecidas en Semana Santa por arma de fuego fueron 52, es decir, 5 más que en el mismo período de 2002. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, el 75 por ciento de los homicidios en El Salvador ocurren por arma de fuego. Aunque no se conoce a ciencia cierta la cantidad de armas de fuego en circulación y en manos de civiles, se estima que éstos tenían, para 1999, unas 400 mil. El registro del Ministerio de Defensa, en el 2000, daba cuenta de unas 140 mil armas legalmente inscritas en dicha cartera de Estado. Pese a que en los últimos años se ha procedido a la destrucción de armas y a la rigurosidad de los requisitos para la tenencia y portación de aquéllas, las cifras son igualmente altas en la actualidad.

El fácil acceso a armas de fuego parece ser un detonante serio de las estadísticas de homicidios cometidos por este medio. Es más, de acuerdo a la Policía, la persona portadora de armas es una víctima potencial, en tanto que en la mayor parte de los casos, es ultimada por su propia arma. En esta línea irían los constantes llamados de las autoridades policiales, de ciertos sectores políticos y sociales a la desarmamentización de la sociedad.

Un segundo punto es la cultura de la violencia en El Salvador que, indudablemente, difiere del resto de países del área. La sensación de inseguridad parece ser mayor entre salvadoreños y guatemaltecos, dados los altos índices de violencia registrados en estos países y a sus particularidades históricas. Al parecer, dirimir conflictos por vías no violentas es una deficiencia de los salvadoreños, cosa que por demás se presta a la discusión. Con todo, tal parece que las conductas violentas se reproducen en condiciones de hacinamiento, baja cobertura de servicios básicos, marginalidad y otros factores característicos de no pocas localidades salvadoreñas.

En tercer lugar, la creciente tensión social puede explicar en parte las preocupantes estadísticas. En un periódico electrónico nacional, el editoralista hablaba en términos de "catarsis vacacional" para referirse al fenómeno registrado durante las vacaciones. Esto tendría sentido si se toman en cuenta las altas dosis de tensión social registradas en los últimos meses entre los salvadoreños. Con evento electoral, crisis de la salud y diversas contradicciones socioeconómicas sobre sus espaldas como el desempleo —podría sostenerse siguiendo esta hipótesis—, los salvadoreños canalizaron sus tensiones mediante conductas violentas. Tal conjetura no es del todo insostenible —aunque no por ello justificable—, si se considera que, a falta de espacios que potencien la salud mental y propicien la recreación a bajo costo, aunado a los otros factores anteriormente mencionados, los salvadoreños hayan drenado sus insatisfacciones violentando el orden legal establecido y transgrediendo la integridad física de otros.

En el caso de la salud, aunque la crisis tenía aún vigencia, los medios informativos dieron una cobertura todavía baja. La crisis era alimentada fundamentalmente por la publicación de campos pagados de uno y otro bando, acusándose mutuamente de mantener en zozobra a los cientos de usuarios del Seguro Social. Solo se registraron algunas acciones concretas: el Hospital de Especialidades del ISSS en manos de los sindicalistas, huelga de hambre de un grupo de galenos, un decreto legislativo que amparaba el reinstalo de los huelguistas y las conversaciones entre los médicos que sí laboraron durante la huelga y el presidente Flores, a fin de que este último vetara el citado decreto legislativo. Para cerrar el mes, el día 28, el consejo directivo del ISSS dictaminó dejar sin efecto el estado de emergencia en las instalaciones hospitalarias, asegurando que se había entrado a la etapa de normalidad en la red del Seguro Social.

En suma, temas vitales quedan pendientes en la agenda nacional, gran parte de ellos condicionados al desenlace de la futuras elecciones presidenciales y a las negociaciones entre las fuerzas políticas mayoritarias (FMLN, ARENA y PCN). Los resultados de las elecciones del 16 de marzo abrieron un abanico de desafíos a los cinco partidos políticos que resultaron ganadores en la justa electoral. Cada uno de ellos, a partir de la cuota de poder conquistada, deberá asumir los retos particulares que le corresponden, con vistas a los comicios del año

2004. Para comenzar, se tiene que decir que, a la luz de los resultados de las votaciones, el PCN fue el partido que obtuvo mayores logros, tanto en la competencia legislativa como en la competencia por alcaldes y concejos municipales.

El PCN tendrá que mostrar más ambición política en la legislatura que empezará a partir del 1° de mayo, lo cual supone revisar los ejes de su alianza incondicional con ARENA. Hasta ahora, la factura del desgaste la ha pagado enteramente el partido oficial, pero no sería nada extraño que tal situación se pueda revertir en el futuro. Además, por otro lado, es casi seguro que los nuevos dirigentes del COENA se pondrán a revisar ciertos elementos incómodos de su alianza con el PCN. Pese a ello, el mayor incentivo que deberá tener en cuenta el partido de las manitas para cambiar muchas de sus prácticas habituales es la aparente competencia por el tercer lugar que están intentando inaugurar el CDU y el PDC. No cabe duda alguna que, de estos dos últimos partidos, el que se encuentra mejor situado para desplazar al PCN como tercera fuerza política es el CDU. Es el partido de moda, gracias a su apuesta por algunas figuras relevantes y de reconocido prestigio entre los sectores medios y urbanos de la sociedad salvadoreña.

Obviamente, los retos de envergadura no son solo para el PCN. El FMLN y ARENA deben hacer lo suyo para sacar las lecciones debidas de los comicios recién celebrados. El partido de izquierda debe enfrentarse con un doble desafío: por un lado, el de la moderación, es decir, del reconocimiento de que los cuatro diputados más que tiene sobre ARENA no le autorizan a asumirse como un partido todopoderoso que es apoyado por la totalidad de los salvadoreños; por otro, el desafío del realismo, es decir, de caer en la cuenta de que la realidad siempre es más compleja que los esquemas ideológicos en los que se la quiere atrapar y de que con fórmulas ideológicas no se construye un proyecto de país más justo, solidario y democrático.

En el peor de los escenarios, los efemelenistas pueden creer erróneamente que cuentan, masivamente, con el apoyo del electorado salvadoreño. Ello se podría traducir en una actitud política cerrada, caracterizada por la suficiencia y la prepotencia. En estas circunstancias, el FMLN corre el riesgo de enfrentar las elecciones del próximo año sin tomar en cuenta a los demás sectores sociopolíticos. Por otro lado, en una actitud contraria, el

partido de izquierda puede mostrarse más flexible y abierto. Para ello, tendría que aprovechar su cuota de poder en la Asamblea Legislativa, en orden a proponer políticas públicas realistas que tomen en cuenta la sensibilidad de los diversos sectores ahí representados. Si este fuera el caso, se pondría en mejor postura para empezar a discutir una amplia alianza con los diferentes sectores productivos del país, descontentos con el rumbo político y económico impulsado por ARENA.

Este último partido, sacudido por unos resultados electorales que no fueron los esperados, tiene

dos caminos: la renovación interna o el endurecimiento. Pasadas las elecciones, los abanderados de una y otra alternativa comenzaron a medir fuerzas; al parecer, la última vía ha tendido a predominar, al escuchar el discurso “conciliador” del presidente Flores. De todos modos, los nuevos jefes areneros tendrán que revisar su asociación con el PCN y el tinte autoritario que ha caracterizado a esta alianza. Además, por otro lado, se tienen que hacer ciertas concesiones sobre algunos temas fundamentales para los salvadoreños, o incluir a otros sectores en la discusión de sus apuestas económicas.

